

Juicio No. 06282-2023-02157

**UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN RIOBAMBA.** Riobamba, martes 30 de enero del 2024, a las 16h45.

**VISTOS:**

**1.- LUIS NELSON RODRÍGUEZ VÁSCONEZ**, Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo, por este trámite conforme el numeral 2 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, ejerce las funciones de Juez Constitucional y fundamentalmente por lo que disponen los artículos 11.3 y 173 del citado cuerpo legal<sup>[1]</sup>, avoca conocimiento de la presente acción de protección por sorteo visible a fojas 66 del proceso, habiendo dictado sentencia en forma verbal<sup>[2]</sup>, se notifica por escrito en los siguientes términos:

**ANTECEDENTES:**

La señora **MARÍA MARGOTH SOTO BEJARANO** titular de la cédula de ciudadanía No. 0602811929, interpuso acción de protección en contra del Lic. Daniel Calderón Zevallos, en calidad de Ministro de Educación; Lic. Lourdes Mancero Fray, Directora Distrital 06D05; y, el Dr. Nelson Silva en calidad de delegado de la Procurador General del Estado, en lo principal señala:

**“[...] SEÑOR(A) JUEZ(A) CONSTITUCIONAL CON SEDE EN EL CANTÓN RIOBAMBA**

**MARIA MARGOTH SOTO BEJARANO** con cédula de ciudadanía Nro. 0602811929, de estado civil casada, de 49 años de edad, ecuatoriana, domiciliada en el cantón Riobamba, en calidad de funcionaria del Ministerio de Educación Pública, en el cargo de Analista Distrital de Atención Ciudadana, por mis propios derechos en adelante, referida como "accionante", "compareciente", "peticionaria", "funcionaria" o simplemente "actora" comparezco a deducir la siguiente garantía jurisdiccional de **ACCIÓN DE PROTECCIÓN** en tutela de mis derechos fundamentales al tenor de los siguientes considerandos establecidos en el art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional -en adelante LOGJCC-:

**I**

**NOMBRES DE LA PERSONA ACCIONANTE, GENERALES DE LEY Y AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE**

Los nombres y generales de ley de la actora han quedado establecidos en el encabezado de esta demanda constitucional.

Su autoridad es competente en razón del lugar en el que se produce los efectos de las omisiones de autoridad pública que han colocado a la actora en una situación de discriminación, toda vez, que el domicilio de la recurrente es la ciudad de Riobamba, al amparo de lo dispuesto en el art. 86 numeral 2 de la Constitución de la República y art. 7 de la LOGJCC.

## II

### IDENTIDAD DE LA PERSONA, ENTIDAD U ORGANO ACCIONADO

2.1. La presente acción está dirigida en contra del Ministerio de Educación, en la persona del Ministro de Educación, Lcd. Daniel Calderon Zevallos o quien, hiciera sus veces.

2.2. En contra de la Directora Distrital 06D05, en la persona de la Lcda Lourdes Mancero Fray o quien hiciera sus veces.

2.3. Además, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y para los fines establecidos en la misma, la presente acción también está dirigida en contra del señor

Procurador General del Estado en la persona del Procurador Regional de Chimborazo, Dr. Nelson Silva, o quien hiciera sus veces.

A pesar de haber iniciado la presente demanda en contra de los máximos representantes de la institución accionada, se deja sentando que, tratándose de acciones constitucionales de protección, no se podrá alegar ilegitimidad de personería pasiva ya que lo que se cuestiona es la violación a los derechos fundamentales que se generan con las omisiones administrativas en la que han incurrido las autoridades accionadas.

### **III**

## **DESCRIPCIÓN DE LAS OMISIONES VULNERATORIAS DE DERECHOS QUE PRODUJERON EL DAÑO Y RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECOS**

### **3.1 Sobre las omisiones que vulneran los derechos constitucionales de la actora:**

Las omisiones que causan daño grave a los derechos constitucionales de la actora y que se impugnan constitucionalmente a través de la presente acción están relacionadas a la inacción de las máximas autoridades del Ministerio de Educación

Pública, en torno a la situación de tratamiento no igualitario en la que se ha mantenido a la recurrente con respecto de otros funcionarios que ostentan mismo cargo, lo que confirma una situación discriminatoria y afectación a sus derechos fundamentales.

### **3.2 Antecedentes de hecho y procedencia de la presente acción:**

El 2 de octubre de 1995 la compareciente ingresó a trabajar en el Ministerio de Educación, desde entonces ha desempeñado sus labores con dedicación y compromiso, actualmente se encuentra vinculada al Ministerio a través de un nombramiento y goza de estabilidad laboral.

En fecha 25 de noviembre del 2019, mediante Acción de Personal Nro. 074-UATH-2019 a la accionante se le confirió el cargo de Analista Distrital de Atención Ciudadana, desde ese momento la compareciente ha cumplido con todas las funciones que le corresponden, asumiendo las responsabilidades y obligaciones del cargo.

Al puesto mencionado le corresponde según el Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos vigente desde el año 2012 una remuneración de \$986,00 USD, como Servidor Público 3. Sin embargo, a pesar del esfuerzo y compromiso con la institución la compareciente ha mantenido sin razón o fundamentación alguna un salario correspondiente a 675,00 USD.

Esta situación no solo afecta el derecho de la señora Margoth Soto a percibir una remuneración justa, derecho que es parte del núcleo esencial del derecho al trabajo, como un derecho fundamental conectado con la dignidad humana; sino que, representa una permanente vulneración de derechos fundamentales, especialmente, el derecho a la igualdad material y no discriminación, considerando que otros funcionarios que ostentan el mismo cargo y, cumplen las mismas funciones, incluso con menos experiencia o perfil, ya sea contratados, con nombramientos provisionales o definitivos sí perciben la remuneración establecida para su cargo.

En concreto, la remuneración que percibe la compareciente al cumplir las funciones de Analista Distrital de Atención Ciudadana es menor a la que perciben otros Analistas Distritales de Atención Ciudadana, traduciéndose esta situación en un evidente trato discriminatorio que contraria el principio y derecho de a igual trabajo-igual remuneración.

Adicionalmente, señalamos que el desempeño de las funciones que ha venido realizando la compareciente ha sido evaluado favorablemente durante todo el tiempo que ha trabajado en el Ministerio de Educación. No obstante, a pesar de tener evaluaciones favorables que evidencian el buen desempeño, el Ministerio ha permitido que a otros funcionarios si se les reconozca las remuneraciones que les corresponde, manteniendo a la actora en una situación discriminatoria, al entregar una remuneración menor a la que en derecho le corresponde por las funciones realizadas.

Para mayor claridad, la remuneración que percibe actualmente la compareciente corresponde a \$675, 00 USD cuando el grupo ocupacional acorde con el puesto que desempeña en realidad es de Servidor Público 3, con una remuneración de \$986,00 USD.

La situación de discriminación en contra de la compareciente a través de sucesivas omisiones de la autoridad pública demandada es evidente, puesto que existen varios funcionarios que ostentan el mismo cargo que la accionante y perciben la remuneración correspondiente, manteniendo a la actora bajo un tratamiento discriminatorio e injustificado.

### **3.2. Derechos constitucionales vulnerados mediante la serie de omisiones de la autoridad accionada.**

??

Derecho a la igualdad formal, material y no discriminación (Art. 11 numeral 2, Art 66 numeral 4);

??Derecho de igual trabajo igual remuneración [Art. 326 numeral 4 de la Constitución de la República]:

?Principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales [Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República] y deber de coordinación de las instituciones públicas [Art. 226 de Constitución de la República]

#### **3.2.1 Las omisiones por parte del Ministerio de Educación violan el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación:**

El derecho de igualdad y no discriminación constituye tanto un derecho de contenido sustantivo, como uno de los principios de hermenéutica jurídica; es decir, es un derecho fundamental en sí mismo, al tiempo que constituye un parámetro de interpretación y aplicación de cualquier derecho fundamental consagrado en la

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

De esta manera, cuando una persona particular, o un órgano público realizan cualquier trato diferenciado irrazonable, no justificado, no sólo que actúa en contra de normas de aplicación, sino que, de manera más gravosa, conculca el derecho fundamental de ser tratado igualitariamente frente a otras personas que se encuentran en su misma situación jurídica.

En este sentido, el derecho de igualdad y no discriminación a criterio de la Corte Constitucional, tiene una doble concepción que ha fijado un estándar claro de actuación para los órganos públicos. Una dimensión formal en el que todas las

personas son iguales ante la ley y gozan de las mismas oportunidades; y, una material, en donde el Estado y sus órganos públicos están obligados a tomar acciones positivas -actuaciones materiales concretas-, con el fin de garantizar la igualdad ante las diferencias injustificadas.

En el presente caso, no existe ninguna justificación razonable, objetiva y válida para que el Ministerio de Educación mantenga un trato diferenciado a la hoy accionante, en relación a otros servidores que ostentan el mismo cargo y si se les reconoce una remuneración de cómo SP3, grado 9, bajo el cargo de Analista Distrital de Atención Ciudadana como es la señora Buenaño Silva Tania Elizabeth, Analista Distrital de Atención Ciudadana con remuneración 986,00; Buñay Yunga Manuel, Analista Distrital de Atención Ciudadana con remuneración 986,00 USD; Cabrera Mora Rosana De Jesús, Analista Distrital de Atención Ciudadana con remuneración 986,00; Casa Tipan Rosa Elvira, Analista Distrital de Atención Ciudadana con remuneración 986,00; Castro Reyes Luis Enrique, Analista Distrital de Atención Ciudadana con remuneración 986,00 USD. De esta forma, el Ministerio de Educación violenta el principio de igualdad en el que todas las personas, que se encuentren en la misma condición, deben recibir un trato idéntico.

Una diferenciación para ser admisible debe ser razonable, sin embargo, en el caso en concreto, no existe una razón válida y suficiente para que a la actora se le trate de forma discriminatoria en su relación de trabajo frente a otros servidores públicos cuyos derechos fundamentales sí son asegurados.

### **3.2.2 Las omisiones por parte del Ministerio de Educación vulneran el derecho fundamental a igual trabajo-igual remuneración de la accionante:**

El principio de igual trabajo e igual remuneración es una de las bases del sistema laboral en el Estado social de Derecho, desarrollado ampliamente por el derecho comparado y la jurisprudencia convencional. Ahora, en nuestra constitución, este derecho permite vincular y aplicar el principio jurídico de la igualdad a los derechos laborales, evidenciándose de esa forma la interdependencia y complementariedad que existe entre los derechos. Esta complementariedad fue reconocida por la Corte Constitucional determinando que es obligación del Estado combatir la discriminación salarial dado que no puede un servidor público recibir remuneración menor a servidores que se encuentran en su misma situación ocupacional.

De esta forma, es una violación clara al principio de "igual trabajo igual remuneración" que exige la actuación del Estado a través de sus órganos públicos (MEP) cuando a servidores que ostentan el mismo cargo y despliegan las mismas responsabilidades y actuaciones en el ejercicio de su cargo, se les reconoce una remuneración diferente. Sin duda, el contenido esencial del derecho al trabajo se encuentra afectado en el componente de una justa remuneración cuando a servidores públicos se les aplica condiciones diferenciadas injustificadas a pesar de que desarrollan la misma actividad laboral.

La Corte Constitucional del Ecuador en Sentencia N.º 063-13-SEP-CC establece: "Es importante destacar que el antedicho principio, guarda estrecha relación con el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación de las personas, que contempla el artículo 66 numeral 4 del texto constitucional. De esta manera, el principio que nos ocupa plantea una igualdad material, cuyo objeto consiste en un mismo trato para las personas que se encuentran bajo iguales condiciones (...). Consecuentemente, esta Corte considera que en función al derecho a la igualdad, así como por la protección laboral que se establece para los trabajadores, estos deberán gozar de igual remuneración cuando no haya fundamentos para justificar lo contrario."

De hecho, el derecho al trabajo para ser un derecho fundamental integral necesita, no solo de una remuneración que se estime justa en relación a las actividades que realiza el obrero o servidor, sino, además, que la misma sea igual en condiciones iguales para otros servidores que despliegan la misma actividad o servicio. De lo contrario, se vulneraría la previsión del constituyente de que a igual trabajo corresponde igual remuneración. Es ahí en donde descansa la legitimidad del accionar público respecto de unos ciudadanos/servidores que esperan un tratamiento igual en su trabajo y el conjunto de condiciones que lo hacen posible, bajo condiciones idénticas para todos.

### **3.2.3 Las omisiones impugnadas contravienen el principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales:**

En relación al principio consagrado en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, la Corte Constitucional, en el caso N.º 1716-11-EP, sostuvo que: "Esta disposición

constitucional establece el principio de que todos los derechos constitucionales, sin excepción, son de directa e inmediata aplicación, lo cual significa que para su ejercicio no se pueden establecer trabas ni restricciones que los menoscaben o vulneren. En este sentido, se determina además una obligación inherente a todo servidor público de proteger eficazmente los derechos constitucionales". Por lo que, correspondía al Ministerio de Educación con fundamento en el artículo 3, numeral 11 de la Constitución de la República, garantizar a la accionante, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales; deber que no ha sido cumplido por la entidad accionada toda vez que, a través de sus omisiones, ha incurrido en una grave vulneración de derechos constitucionales. Este principio de aplicación se traduce en la posibilidad de que el conjunto de derechos fundamentales pueda ser ejercido de la manera más amplia posible sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para su tutela y protección. Esta garantía primaria permite que las entidades accionadas corrijan la desviación de poder en la que estarían incurriendo, cuando, en situaciones idénticas, han realizado tratamientos diferenciados irrazonables respecto de sus funcionarios y servidores tal como sucede en el presente caso. El deber ser, impuesto por el constituyente a través de este principio, una vez que ha sido inobservado vuelve impracticable todo el resto de derechos fundamentales en los cuales descansa la legitimidad de ejercicio del poder público; considerando que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de sus administrados.

De ahí que en el presente caso se hable de una omisión de autoridad pública como presupuesto de procedibilidad de la garantía, toda vez que, el órgano accionado debió haber corregido esta serie de vulneraciones a los derechos fundamentales de la actora, actuando, disponiendo, corrigiendo, -con base en el principio de aplicación directa e inmediata-, la tediosa violación al derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, patente en el caso de la actor; así como el derecho a igual trabajo, igual remuneración que se estaba y continúa transgrediendo; de ahí la pertinencia de la acción constitucional. No haber corregido, no haber actuado; o, lo que es lo mismo, haber omitido actuar, coloca en situación de vulneración de derechos a la accionante.

### **3.3 Sobre la declaratoria de vulneración de derechos en casos análogos.**

#### **3.3.1 Un proceso con características similares es el de la señora Lourdes Monica**

Haro Reinoso, signado con el No. 06101-2020-02043, en el que la Sala Especializada

de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, declaró con lugar la acción de protección y estableció:

“DECLARAR la vulneración del derecho no a la discriminación, de igualdad material y formal, el de motivación del acto administrativo impugnado y al igual trabajo igual remuneración de la señora LURDES MONICA HARO REINOSO. Como Reparación Integral se dispone el pago de las remuneraciones que le corresponde a igual trabajo igual remuneración y de acuerdo al puesto de funciones que desempeña como Analista Distrital de adquisiciones de acuerdo a la acción de personal Nro. MSP\_DD06D04-UATH-2019-304”

3.3.2 Un segundo caso es el de la señora Patricia Alexandra Trujillo Esparza en el que se aceptó la acción de protección planteada al haberse determinado que por la omisión del Ministerio de no cumplir con la obligación que le determina el literal c) del Art. 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público, se han vulnerado los derechos alegados por la accionante. Por lo tanto se dispone que, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en forma inmediata coordinen las acciones administrativas necesarias para concluir el proceso de reclasificación respecto de la accionante señora PATRICIA ALEXANDRA TRUJILLO ESPARZA. En lo que tiene relación a la Reparación Integral que determina el Art. 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y debiendo tener en cuenta que como parte de dicho Manual se encuentra el formulario de análisis ocupacional y existen procedimientos de cumplimiento para otorgarle a la accionante los derechos que se han determinado han sido vulnerados, disponiendo que la remuneración que le corresponde en calidad de Analista Administrativo 2, Servidor Público 6 y que actualmente debe percibir será a partir de la fecha del pronunciamiento oral con la sentencia dictada dentro de la presente causa, es decir desde 09 de mayo del año 2022.

3.3.3 Otro proceso es el de la señora Myriam Mejía Freire en contra del MSP. Proceso signado con los números 18331201900546 (primera instancia) y 18102201900027 (segunda instancia). El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua resolvió:

"acogiendo el recurso de apelación propuesto por Myriam Cecilia Elizabeth Mejía Freire, revocando la sentencia de la jueza de primera instancia constitucional, se declara con lugar la

acción de protección, por estimar se han conculcado derechos constitucionales, como son de igualdad material y formal, derecho a la no discriminación, a igual trabajo igual remuneración, y el motivación del acto administrativo impugnado; por cuanto se estima que el legitimado pasivo, ha menoscabado los derechos antes señalados"

#### **3.3.4 Un tercer caso en el número 17230-2023-12557, de la señora Carmen Aldas, en el cual el resolvió:**

"Aceptar la Acción de Protección propuesta por la señora Carmen Magdalena Aldas Navarrete, en el cual la Unidad Judicial Civil de la Parroquia Iñaquito declaro la vulneración del derecho a la igualdad formal y material y no discriminación de la accionante, disponiendo como medidas de reparación: 1) Por daño material: que la institución accionada, ubique a la señora Carmen Magdalena Aldas Navarrete, en la categoría de servidor público SP5 grado 11, con la remuneración que le corresponde, esto es \$1.212,00 desde el mes de agosto del 2023; que se le cancela la remuneración que le corresponde, desde el 1 de abril del 2019, es decir que: se debe calcular la diferencia entre los \$ 659,84 a los \$ 1.212,00, desde el 1 de abril del 2019, hasta el mes de julio del 2023, valores que serán cancelados de forma inmediata a la legitimada activa; y 2) Por daño inmaterial: Esta sentencia y la no repetición de vulneración de derechos." Sentencia que fue rectificada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial del Pichincha

3.3.5 Por último, encontramos muy caso muy similar en la acción signada con el número 01283201700299, en donde se juzgaba una omisión de las autoridades de Salud y del Hospital Vicente Moscoso de Cuenca, en el que la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, revocando la decisión de primera instancia, aceptó la acción constitucional propuesta y declaró la vulneración a los derechos fundamentales de varios proponentes, en relación a la omisión del MSP, disponiendo como reparación integral, se proceda a ubicarles a los actores en el grado y escala que les correspondía desde el año 2003 y año 2004, ordenando que la reparación económica y su respectiva cuantificación sea dispuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca.

#### **3.4 Sobre la inaplicabilidad de las prohibiciones formales para la procedencia de la acción de protección como garantía en tutela de derechos fundamentales:**

En el momento procesal oportuno, -audiencia pública-, se sostendrá que la acción interpuesta no se encuentra incurso en ninguna de las causales de improcedencia contenidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

#### **IV**

#### **PRETENSION**

Con base en los antecedentes expuestos, y en fundamento de los arts. 86 y 88 de la Constitución de la República, así como el art. y 39 siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitamos como pretensión lo siguiente:

- i. Se declare la vulneración a los derechos de igualdad formal, material y no discriminación, derecho de "igual trabajo igual remuneración" de la actora, y, la vulneración del principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales, así como la vulneración del deber de coordinación entre instituciones públicas con el fin de satisfacer la vigencia de los derechos constitucionales.
- ii. Consecuentemente, se ordene como reparación integral lo siguiente:
  - a. Se ordene al Ministerio de Educación tutele de forma igualitaria la situación ocupacional de la accionante a la de Analista Distrital de Atención Ciudadana del grupo ocupacional de Servidor Público 3, con la remuneración que corresponde, esto es \$986,00 USD con el objeto de restituir la situación jurídica a una relación de igualdad frente a los otros funcionarios de esta categoría ocupacional que ejercen las mismas funciones que la compareciente.
  - b. ???Adicionalmente, dado que la accionante se encuentra en esta situación de discriminación desde el año 2019 se dispondrá el pago de la remuneración ajustada desde el 25 de noviembre del 2019, hasta la actualidad, para su consecuente reclamación de acuerdo al trámite pertinente establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y conforme a la

sentencia Nro. 8-22-IS/22 de la Corte Constitucional.

c. ???De la misma manera, se dispondrá que la autoridad accionada se abstenga de ejecutar acciones que afecten los derechos fundamentales de la accionante [...] [3]”.

**2.- ADMISIÓN.** Admitida a trámite la presente acción, signada con el número 06282-2023-02157, una vez que se calificó la misma, en consideración a lo expuesto en la providencia de fs. 67 de fecha, lunes 18 de diciembre de 2023, a las 10h52, se procedió a convocar a los accionantes y accionada a la audiencia constitucional, para el día viernes 22 de diciembre de 2023, la misma no tuvo lugar por pedido de las partes, quienes señalan que recién han sido notificados y requieren tiempo para preparar la defensa, por encontrarse de turno el juzgado a mi cargo del 25 de diciembre del 2023 al 1 de enero de 2024, se convocó para el día 10 de enero de 2024, por enfermedad del suscrito juez se difirió para el día miércoles 17 de enero de 2024, reinstalándose el día viernes 26 de enero de 2024, por lo mismo, se considera:

### **PRIMERO**

#### **COMPETENCIA**

La jurisdicción y la competencia de la Judicatura se encuentran legalmente conferidas por los artículos 86 y 88 de la Constitución de la República del Ecuador, y que ocasionalmente, por este trámite conforme el numeral 2 del artículo 86 ibídem, el suscrito Juez ejerce las funciones de Juez Constitucional y fundamentalmente por lo que disponen los artículos 11.3 y 173 del citado cuerpo y conforme al sorteo de ley que obra a fs. 66.

### **SEGUNDO**

#### **VALIDEZ**

La acción de protección se precisó en la vía sumaria establecida por el artículo 86 y siguientes de la Constitución de la República, advertido de las solemnidades necesarias para esta clase de acciones, por lo que se declara válida.

### **TERCERO**

#### **AUDIENCIA PÚBLICA**

#### **1. Argumentos de la Accionante:**

**Ab. Javier Molina López.** Abogado patrocinador de Margoth Soto, quién es la parte actora, voy hacer bastante concreto en mi intervención, pues quiero centrarme en algunos puntos que considero medulares para responder la pregunta más relevante de esta acción constitucional, la pregunta más relevante es ¿por qué esta acción debe ser tutelada por la justicia constitucional?, ¿Cuáles son las características que tiene el presente caso que hacen que deban

ser tutelado por la justicia constitucional?, en ese sentido me voy a referir brevemente a la situación a los antecedentes de hecho específicos que le dan una condición de estabilidad a la compareciente Margoth Soto, quien empezó a trabajar en el Ministerio de Educación en el año de 1995, específicamente el dos de Octubre, durante ese tiempo hasta la presente fecha, la hoy compareciente ha desempeñado sus labores con completa dedicación y compromiso, y en ese sentido en todo este tiempo se puede ratificar del expediente y de las pruebas que he permitiré anunciar al finalizar mi intervención pues que goza de perfecta estabilidad, qué es lo que ocurre en la en esta línea del tiempo de la relación de trabajo que tiene la hoy compareciente con el Ministerio de Educación Pública; el Ministerio de Educación en fecha 25 de noviembre de 2019, mediante acción del personal número 074-UATH-2019, le confiere el cargo a la hoy compareciente de **Analista Distrital de Atención Ciudadana**, desde aquel momento la compareciente ha cumplido con todas las funciones que le corresponden a ese cargo, asumiendo todas las responsabilidades y obligaciones a dicho cargo, en ese sentido vale recalcar, que la hoy compareciente en cualquier caso, si es que la autoridad de control por ejemplo, la Contraloría General del Estado, si hace un análisis de su responsabilidad inherente al cargo, pues lo hace como analista Distrital de Atención Ciudadana y esto es importante, porque si bien el Estado de cualquier este cargo y este cargo consta en el manual de descripción clasificación y valoración de puestos que está vigente ya desde más de 10 años, es decir en el año 2012, contempla en este manual una remuneración de 986 dólares, es decir como funcionario SP3, sin embargo, a pesar de que la autoridad pública el Ministerio de Educación específicamente le reconoce este cargo, la institución le mantiene pagando 675 dólares, es decir, como funcionario de apoyo a la hoy compareciente, en este sentido nosotros debemos centrar en la acción de protección y el análisis constitucional que debe estar siempre ligado a la normativa que existe al respecto, esto es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el primer requisito que nos exige la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional para que una acción de protección sea considerada como tal, es que exista una omisión o acto de autoridad, qué es lo que decimos nosotros, que existen unas omisiones que se perpetran a lo largo del tiempo, en relación a que la hoy compareciente si bien se le ha reconocido este cargo, el Estado no ha realizado las acciones tendientes para que se garantice y se tutele su derecho a la igualdad y pueda ganar como SP3, es decir el Estado le tiene trabajando en un cargo que no tiene discusión de acuerdo al manual de puestos que debería ser SP3, pero le paga como servidora del apoyo, es decir 675 dólares, entonces cumplimos con el primer requisito, pues cumplimos toda vez que no existe una acción por parte del Estado, si el Estado admitido tutela de manera igualitaria la situación de la hoy compareciente en relación a otros funcionarios al propio manual de puestos, aquí debo llamar su atención, porque el componente de la justa remuneración que es parte de lo que estamos hablando en este caso, está dentro del componente, lo que se conoce como el núcleo esencial de los derechos de los trabajadores, es un núcleo que no se puede tocar, el tratadista Ferrajoli habla siempre de una esfera de oro no decidible de un núcleo y es decir, el Estado ningún ciudadano puede decidir sobre aquella situación, no se puede tocar, son derechos que no se pueden tocar, al Estado es la justa remuneración lo esencial del derecho al trabajo, pues justamente define que esta sea la vía para que sea tutelada en

situación, esta situación que solo siendo contrastada con el manual de puestos, ya nos da luces de que hay una vulneración a este núcleo esencial del derecho al trabajo, es decir el componente de la justa remuneración por lo que yo he mencionado, se agrava y hace que la tutela constitucional sea aún mayor más relevante, cuando nosotros contrastamos con la información que hemos adjuntado al libelo de nuestra demanda constitucional de otros analistas distritales de atención ciudadana, en este caso, es relevante que en los hechos nosotros demos los nombres de por ejemplo, Tania Buenaño, analista distrital que gana 986 dólares, Manuel Buñay, analista distrital de atención ciudadana, igual con 986 dólares, Rosana y Jesús Cabrera, también con 986 dólares, Luis Enrique Castro, 986 dólares, todos ellos analistas de distritales de atención ciudadana y esta es información que nosotros hemos adjuntado al libelo de nuestra demanda constitucional, es parte de nuestra prueba, es información pública que hemos obtenido de la página, digamos de la información que se cuelga en transparencia el Ministerio de Educación y en ese sentido aquí es cuando la situación reviste una condición especial y es por eso que debe ser tutelada por la justicia constitucional, por qué simplemente, si bien no toda situación de desigualdad debe ser tutelada por el Derecho Constitucional, cuando existe una omisión del Estado, serie de omisiones en realidad como lo hemos identificado en el libelo de nuestra demanda, que afecta justamente el derecho a la igualdad y no existe ninguna razón suficiente o válida para que la hoy compareciente Margoth Soto sea tratada de manera discriminatoria de manera desigual en relación a todos estos funcionarios, que como la doctrina nos exige son considerados pares de igualdad, entonces lo lógico y lo razonable es que el juez constitucional como en este caso su autoridad, se pronuncia al respecto y usted de manera igualitaria, esta situación omisiva que vulnera sus derechos fundamentales de la hoy compareciente, en ese sentido, hemos identificado de manera clara una situación laboral en las línea del tiempo, un reconocimiento formal y material, aquí hay que decirlo de manera clara, ciertamente el Estado muchas veces lo que hace es que le reconoce a un funcionario o le asigna funciones, pero ni siquiera le da una acción de personal, es decir no hay un reconocimiento formal esos casos también son peleadores de la justicia constitucional, pero quizás no son tan patentes como el presente, porque en este caso tenemos un reconocimiento formal, es decir incluso con la acción de personal y un reconocimiento por materiales, es decir que la realidad primaria del principio de realidad el funcionario, en este caso la funcionaria Margoth Soto viene desarrollando estas actividades y tiene un reconocimiento también en el papel, es decir una acción de personal como Analista Distrital de Atención, En ese sentido, de acuerdo a los hechos que hemos relatado, nosotros decimos que se vulnera el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación, el derecho de igual trabajo, igual remuneración, el principio de aplicación directa e inmediata a los derechos fundamentales, incluso el deber de coordinación de las instituciones públicas, en este sentido, cumpliendo con el primer requisito pues, en la omisión de autoridad pública paso a retratar cada 1 de los derechos. Pues el derecho a la igualdad y no discriminación, constituye un Derecho Sustantivo pero también es un principio del genética jurídica, es decir es un derecho fundamental que hace posible el ejercicio de otros derechos de un Estado en donde los ciudadanos somos tratados de manera discriminatoria, no podemos ejercer nuestros derechos, es por eso es tan relevante este derecho, es decir cuando el órgano

público realiza un trato diferenciado irrazonable, no justificado, sí vulnera este derecho, en el caso que nos atañe esta mañana, pues la voy compareciente, no conoce ninguna razón objetiva válida y suficiente para que se le pague una remuneración menor a la de sus compañeros cuando depende el mismo cargo, yo he puesto incluso este ejemplo irrisorio, de que si es que la Contraloría General del Estado le examina desde el año 2019, pues seguro su responsabilidad va a ser tratada como Analista Distrital de Atención Ciudadana y no como un Servidor Simple de Apoyo, el Estado cuando se trata de su responsabilidad pues ahí sí le va a ver como Analista Distrital de Atención Ciudadana, pero cuando se trata de pagarle la justa remuneración ahí simplemente no cumple el Estado, la hoy compareciente ha esperado pacientemente desde el año 2019, ya que como usted conoce, las autoridades de turno que lamentablemente cambian de una manera bastante rápida, pues le han ofrecido tutelar y garantizar esta situación del componente de la justa remuneración, sin embargo a pesar de todos los ofrecimientos y varias reuniones, pues esto no se hará, es por eso que la compareciente comparece ante su autoridad para que sus derechos fundamentales sean tutelados, en este sentido el derecho a la igualdad ha sido vulnerada, tal así que como hemos presentado y está adjuntado al libelo de la demanda pues los pares de igualdad han sido considerados para la presente demanda y no va a existir ninguna razón válida y suficiente por parte del Estado, que esa sería dicho de paso la única prueba válida, el por qué a esos ciudadanos como la señora Rosana Cabrera Mora, como el señor Manuel Buñay, Rosa Caza, Castro Reyes Luis Enrique, porque a ellos sí se les paga de una manera teniendo el mismo cargo de la compareciente. De esa hipótesis de defensa, de ese análisis se desprende que también se vulnera obviamente el derecho fundamental de igual trabajo igual remuneración, porque es que la hoy compareciente realiza las mismas actividades que los compañeros del trabajo que son Analistas Distritales de Atención Ciudadana, pero recibe una menor remuneración y esto ha sido reconocido por la Corte Constitucional, está en Tratados Internacionales y obviamente nuestra Constitución reconoce este derecho que hace que los ciudadanos podamos gozar de otros derechos también porque asegura justamente ese componente, en relación a nuestros similares a nuestros pares, otro derecho que se ha vulnerado y decimos desde el principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales, es que los ciudadanos no podemos esperar, no podemos esperar la voluntad política que muchas veces quienes vivimos en provincias alejadas de la centralidad no se nos toma en serio, y es que el Estado necesita y tiene una obligación de aplicar de manera directa e inmediata los derechos fundamentales, es decir al conocer que existe una situación de discriminación en una entidad, lo que debe hacer el Coordinador Zonal, Ministro, Talento Humano quien sea, pues debe tutelar de manera inmediata esa situación de los funcionarios, y eso no se ha cumplido por parte del Estado, el Estado como entenderemos va a ser la presentación de la defensa técnica, nos va a decir que hay tramites que hay situaciones que no corresponden a ellos, que hay unas situaciones de requisitos, pues no justamente para eso es la Constitución y para eso son los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales, para que sean tutelados de manera directa e inmediata. Por otro lado, debemos decir que también no se ha cumplido este deber de coordinación, porque hay que decirlo y muchas audiencias que nosotros tenemos en casos

constitucionales similares o parecidos, nosotros tenemos una respuesta en el Estado que nos dice, sabe qué es lo que pasa es que no cumple finanzas, no cumple el Ministerio de Trabajo, no cumple la Presidencia, bueno eso es un tema que no le corresponde a la ciudadana, la situación de la ciudadana que comparece a clamar por la justicia constitucional es una situación de desventaja total ante el Estado y no le corresponde saber a quién le corresponde o de quién es el deber de coordinar de hacer ciertos trámites, sino lo que necesita el ciudadano es que se tutele sus derechos fundamentales y por ahí va el tema, entonces no se le puede pedir encima al ciudadano que dicho de paso estas garantías incluso está previsto en la Constitución y en la ley que se puedan poner de manera verbal, no se les puede exigir que se la tenga que entender de engorrosos trámites para que sus derechos sean tutelados, en ese sentido se vulnera también el deber de coordinación, pues hemos retratado los cuatro derechos constitucionales que nosotros acusamos que se han vulnerado, nosotros hemos adjuntado como jurisprudencia indicativa, casos análogos que ya han sido tutelados por la justicia constitucional en las propias salas de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, el caso de Lourdes Haro Reinoso con el Código 06101202002043, el caso de Patricia Trujillo, el caso de Miriam Mejía de una Provincial vecina de la Sala Especializada en la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, el caso de Carmen Aldas, también de la parroquia de Iñaquito, y así algunos casos más para que su autoridad pueda ver que ya sea tutelado en casos análogos y esto puede servirle de jurisprudencia indicativa para que su autoridad pueda mejor decidir, y cuál es nuestra pretensión en base a lo narrado, pues que se declare la vulneración a los derechos de igualdad formal material y no discriminación, derecho de igual trabajo remuneración de la actora, la vulneración del principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales, así como la vulneración del deber de coordinación entre las instituciones públicas, con el fin de que se pueda satisfacer la vigencia de los derechos constitucionales de la hoy compareciente, consecuentemente, como reparación integral solicitamos lo siguiente, se ordena al Ministerio de Educación de forma igualitaria, la situación ocupacional de la hoy accionante de Analista Distrital de Atención Ciudadana del grupo ocupacional del servidor público SP3, con remuneración 986, dólares con el objeto de restituir la situación jurídica a una relación de igualdad frente a los otros funcionarios, pares de igualdad que nosotros hemos relatado, adicionalmente dado que la ciudadana se encuentra en esta situación de discriminación desde el año 2019, se dispondrá el pago de la remuneración ajustada desde el 25 de noviembre de 2019 hasta la actualidad, para su consecuente reclamación de acuerdo al trámite pertinente que lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y obviamente el seguimiento o la ejecución de dicha sentencia se le hará de acuerdo a la última sentencia de la Corte Constitucional, esto es la 8:09 H 21. 22, cuáles son las pruebas que nosotros hemos aportado si bien este es una audiencia telemática, pues la acción de personal número 074ATH2019 que está adjuntada a 1 demanda constitucional, en la cual se puede ver claramente que el Ministerio de Educación le otorgaron a la compareciente el cargo de Analista Distrital de Atención Ciudadana, la prueba número dos es la certificación emitida en el año 2023 por el Ministerio de Educación, en el que consta el tiempo total del servicio prestado por la actora y la modalidad en la que se encuentra laborando, es decir nombramiento

permanente, Analista Distrital de Atención Ciudadana, a confesión de parte relevo de prueba con esta causa, el manual de descripción y valoración de puestos para que puede ver que el cargo de Analista Distrital de Atención Ciudadana es un cargo SP3, como lo hemos venido diciendo, la información de transparencia, que es información pública, en donde consta que la hoy actora gana 675 dólares que es un hecho que entiendo no será contrastada por la defensa, la captura de pantalla de la información verificable, transparencia en dónde están los pares de igualdad que hemos sabido narrar, es decir, la señora Cabrera Mora, la señora Castro que un ejemplo de funcionarios para que usted pueda constatar esta situación de discriminación, finalmente la jurisprudencia indicativa para que conozca estos casos análogos para su mejor decidir, en este sentido pues ratificamos nuestra pretensión y quedamos atentos para el tiempo que se nos conceda para la réplica.

## **2. Argumento de los accionados:**

**Ab. Jaime Rigoberto Chicaiza**, Defensa Técnica designado para la presente diligencia por parte del Distrito de Educativo Guano, por parte de la Coordinación Zonal de Educación y por parte del Ministro de Educación, bajo los principios de buena fe y lealtad procesal se hace saber y conocer que no se encuentra presente en la presente diligencia la Procuraduría General del Estado, siendo uno de los requisitos esenciales dentro de esta audiencia. Segundo, una vez escuchada los alegatos de la defensa técnica de la legitimación activa, conforme lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, procedo con mis alegatos, la defensa técnica de la legitimidad activa ha señalado que estaba fungiendo como Analista de Atención Ciudadana y en el cual no está percibiendo una remuneración adecuada conforme a las atribuciones que le corresponde, pero dentro de sus alegaciones va a justificar qué actividades realiza como Analista de Atención Ciudadana, puesto que dentro de esa configuración de la unidad de atención ciudadana también existe el puesto de técnico de atención ciudadana, en tal sentido, conforme lo determina la sentencia constitucional. 73-21-IC/22, ha señalado de manera clara el numeral 3 que dice. Toda persona tiene derecho a igual trabajo, igual remuneración siempre y cuando se justifique sus actividades al realizar dentro de una institución pública, por lo cual se tiene que justificar qué actividades realiza la legitimada activa, si lo realiza como analista de atención ciudadana o lo realiza como técnico de atención ciudadana, eso es un aspecto esencial que se debe tener en cuenta, de la misma manera, solicito que se tenga como prueba y también bajo el principio de buena fe y lealtad procesal que se abra un término de prueba conforme lo determine el artículo 16 de la Ley Orgánica Educación Intercultural, para poder incorporar el oficio de fecha 3 de diciembre del 2020, en el cual la Directora Distrital de ese entonces, a Margoth Soto le designa como presuntamente técnica de atención ciudadana y se le hace saber que este cambio no llevaría a un aumento de su remuneración unificada, y dentro de ese mismo documento, la legitimada activa acepta su señoría a este cambio y señala que estoy de acuerdo con dicho cambio sin solicitar el aumento de su remuneración, de la misma manera conforme lo ha señalado que sea un término de prueba, conforme dispone el artículo 16 para solicitar un informe técnico a la Unidad de Talento Humano del Distrito Educativo de Guano, para qué justifique qué

actividades realiza la legitimada activa si sus actividades son como Analista de Atención Ciudadana o como Técnica de Atención Ciudadana, puesto que ese es el punto modular y esencial para justificar la remuneración que debe percibir la legitimada activa en la actualidad, porque pregunto qué actividad realiza la legitimada activa, la defensa técnica ha señalado que la realiza conforme al tanque puestos y la actividad realiza, traigo a colación lo que determina la Gaceta Constitucional, sentencia. 380-17-CP/17, del caso número 2334-16-EP, que señala de manera clara y que me permito darle lectura. Dentro de una acción de protección los legitimados activos deben demostrar la vulneración de los derechos constitucionales con los hechos narrados, aquí se está diciendo que hay personal que gana 986, pero que ella gana 685, que se le ha descriminalizado, pero que se justifique que actividades y las mismas actividades que realizan las personas de analistas de atención ciudadana de 986 son las mismas actividades que realizan como Técnica de Atención Ciudadana que dentro del manual de puestos que así lo conlleva, qué realiza un técnico de atención ciudadana, recibir oficio, aceptar oficio, despachar oficios, técnico de atención ciudadana, qué actividades realiza la hoy legitimada activa, con estos aspectos esenciales, también hay que tener en cuenta que existe un documento que me permito darles lecturas, y dice que en atención al oficio 06D05-294-2020, de fecha primero de diciembre del 2020, me permito manifestar a usted, señora Directora que aceptó el traspaso del puesto al Distrito Educativo como atención ciudadana sin ningún cambio en la remuneración mensual unificada, tal como usted lo hace referencia en el documento que no existe disponibilidad de recursos y que solamente con una reclasificación de puestos se puede acceder a este proceso, este documento se encuentra suscrito por la funcionaria Margoth Soto hoy legitimada activa, estos documentos reposan y se los ha hecho llegar, por la verdad, por el tiempo a mi despacho, en el término de pruebas solicitada, siempre y cuando usted lo acepte.

#### **RÉPLICA DE LA ACCIONANTE:**

**4.- Ab. Javier Molina.** Primero, parece que se está pasando por alto que el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos dice que, la ausencia, incluso la persona o institución accionado, no impedirá que la audiencia se realice, es decir poner aquí elementos que el hecho de que no esté aquí la Procuraduría, genera algún problema procesal me parece completamente absurdo. Segundo, me llaman poderosamente la atención que en una audiencia constitucional se quiera trastocar el principio sobre la carga de la prueba, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, nos dicen claramente que en acciones de protección en acciones constitucionales, la carga de la prueba se revierte, y me llama más todavía poderosamente la atención que en una audiencia que ya viene prolongándose en el tiempo, nos venga el día de hoy la defensa técnica del Estado a decir, que no está seguro o que no sabe qué actividades realiza y que hace que nosotros, que tenemos una acción de personal suscrita por el Estado, deberíamos hoy día demostrar qué acciones realizan, o sea en el trabajo, qué actividades, me parece vergonzoso una defensa de ese tipo, es decir el Estado hubiese demostrado, cosa que no va a poder hacer, que está haciendo actividades de otro cargo la

funcionaria la cual pegado a un cargo de analista distrital de atención ciudadana, yo no entiendo el Estado por qué hace eso, el Estado entonces entrega o le otorga un cargo, le dice, sabe qué firmeme este papelito para que no me demande en el 2020, que usted acepta esa remuneración, casi que aquí, revirtiendo el principio de que no se puede renunciar a sus derechos, pero bueno, ya le hacen firmar ese documento, la compareciente firma ese documento sabiendo, que existe una promesa de arreglar o de tutelar la situación a través de un procedimiento administrativo, pero qué es lo que pasa, pasan 3 años y así como pasarán 3, podrán pasar 6, 10 o 15, casos tenemos, el Estado no va hacer nada y la situación de la compareciente va a ser idéntica, ese procedimiento administrativo, no va a llegar nunca, el Estado tiene otras prioridades, el Estado está en soletas este momento, por ahora no vamos a pensar siquiera que el Estado va a tutelar de manera igualitaria los derechos de los comparecientes, entonces me parece una posición sumamente cómoda, leer inclusive una renuncia expresa a sus derechos fundamentales, que en un principio de confianza legítima que los ciudadanos tenemos de que el Estado nos debe garantizar el principio de confianza legítima, hace que nosotros los ciudadanos, pensemos que el Estado va a actuar de manera correcta y la tutela de nuestros derechos fundamentales, y encima nos dice que ha renunciado casi casi a los derechos, porque a través de ese documento firmado ha dicho, yo estoy de acuerdo y sé que voy a ganar menos y por último así me quede hasta el final de los días, eso no puede ser aceptado, y peor aún trastocar el principio de la reversión de carga de la prueba, el Estado no ha traído ninguna prueba del por qué se le está vulnerando los derechos fundamentales, del por qué se le está tratando de manera desigual, peor aún, me parece hasta irresponsable traer a tela de dudas de si las actividades son de técnico, de analista de funcionarios de apoyo, el Estado le está concediendo una acción de personal, y en lo material viene haciendo esas mismas funciones, me parece vergonzoso que el día de hoy se trate de decir que inclusive se está queriendo oficiar a talento humano para saber qué actividades realiza la hoy accionante, entonces yo creo que aquí estamos en una tergiversación de lo que corresponde a una defensa seria y formal de una institución, por otro lado, una de las sentencias anotadas que es la que ha sido extraída a colación para la presente causa, habla justamente es una acción de incumplimiento de una sentencia constitucional, y lo que termina siendo, porque aquí no se puede leer de manera descontextualizada ciertos numerales de la sentencia constitucional, para llegar a decir casi que el tema de igual trabajo igual remuneración tiene que ser justificado, tiene que ser demostrado y tiene que ser probado, eso es aceptable siempre y cuando el Estado no haya reconocido pues un cargo, yo estoy de acuerdo con el abogado del Ministerio de Educación, en el caso que no es el presente, es decir, en el caso en que un funcionario de manera material se le asignan actividades y no cuenta con una acción de personal, entonces ahí sí yo tendría que venir aquí a demostrar, sí efectivamente estas son las actividades de la funcionaria, pero cuando el Estado es el que reconoce yo incluso se nos ha leído un oficio vergonzoso, me parece sumamente fuera de lugar aquella petición y más aún una sentencia que es una acción de incumplimiento que de lo que estoy leyendo termina siendo aceptada por el Presidente de la Corte Constitucional Alí Lozada, en este sentido no tengo ningún otro argumento que desvirtuar.

**5.- Ab. Jaime Rigoberto Chicaiza.** Primeramente una vez escuchado los agravios de la defensa técnica de la legitimada activa, hay que tener en cuenta aspectos esenciales dentro de la administración pública, existe una acción de personal dirigida a la legitimada activa, en el cual se designan como Analista de Atención Ciudadana, esta defensa técnica y esta cartera de Estado quiere justificar, lo va a justificar dentro del término de prueba solicitado, que las actividades que realiza la legitimada activa no es de Analista de Atención Ciudadana, sino de Técnica de Atención Ciudadana, en la misma manera, en razón a la sentencia dictada, los jueces hacen un análisis en el que determinan que las actividades que se realicen deben ser algo acorde al cargo que está ocupando, Por eso se trae a colación dicho accionar, también en el documento que acabo de darle lectura, el documento vergonzoso, como lo ha llamado la defensa técnica, es un documento suscrito por su misma defendida, en el cual ella está aceptando que dichos cambios administrativos, no le conllevarían a un aumento de la remuneración y ese aumento se lo hará siempre y cuando exista un proceso de reclasificación, para ese proceso de reclasificación se tiene que cumplir ciertos requisitos esenciales procedimentales administrativos, más no la exigencia a través de una acción constitucional, por lo tanto vuelvo y recalco, solicito que se abra un término de prueba esencial determinado en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y para así esta cartera de Estado, justificar y demostrar las actividades que realiza la legitimada activa, estas actividades se justificarán directamente conforme al manual de puestos debidamente certificados por planta central del Ministerio de Educación y por parte de la Coordinación Zonal de Educación.

#### **ULTIMA PALABRA.**

**6.- Ab. Javier Molina.** No he realizado ningún tipo de agravio, de manera personal ni técnica en contra del abogado, debo aclarar que lo único que hecho, es relatar que sus argumentos simplemente no son válidos y son absurdos, eso es diferente, y eso es justamente nuestra labor como abogados en un litigio sano y con altura, mayor de los respetos siempre para todos mis colegas, con esa aclaración quiero decir, primero, no puedo comprender, es decir, no entiendo como el Estado puede decirnos hoy que tiene que revisar si es que ella es Técnica de Atención Ciudadana o Analista Distrital de Atención Ciudadana, cuando le ha conferido una acción de personal, es inclusive contradictorio al propio oficio que ha dado lectura el abogado del Ministerio de Educación, el sostener que entonces es Técnica de Atención Ciudadana, porque si no, por qué no le dieron ese cargo pregunto yo, no es lógico, es decir, como debe funcionar el Estado, es que cuando se quiere lanzar un concurso interno, para otorgar ciertos cargos de funcionarios que hace un procedimiento en el cual se debe contar con una certificación presupuestaria, análisis de talento humano y entonces eso sucede en la línea de tiempo y después del Estado, entonces emite acciones de personal, pero lo que sucede en la realidad, lastimosamente, no pasa así no más en otros países, la verdad es que es al revés, acá lo que se hace es que se confieren cargos para llenar vacantes y después se dice voy hacer un análisis, para ver si tengo la plata, y puedo aplicar el Manual de puestos, cuando ya eso no es correcto, dicho sea de paso, la única forma de darse de baja del mundo jurídico un acto administrativo que confiere derechos subjetivos eso lo conocemos todos los abogados que estamos aquí

presentes, es la acción de lesividad, es decir, si usted no está de acuerdo con el cargo que le confirió, es decir, administración a una funcionaria, cree que sus funciones, su perfil lo que sea que haya ocurrido no es acorde al cargo de Analista Distrital, lo que le corresponde es declarar lesivo ese acto administrativo y someterlo al control de legalidad por los jueces de lo Contencioso Administrativo, eso es la única forma, ahora que aquí se sostenga que la hoy compareciente no realice esas actividades, me parece simplemente absurdo. Finalmente para ir concluyendo, yo tengo que relatar que en esta audiencia constitucional, que se venía postergando, la autoridad pública contó con el tiempo suficiente para traer cualquier prueba que considere necesaria, y no ha podido hasta este momento desvirtuar nuestros argumentos que han sido documentados y probados, es decir, traer aquí presuposiciones alegatos sobre las actividades de la hoy compareciente, simplemente no son el lugar, lo único que debía haber hecho el abogado que hoy comparece es solicitar una certificación del departamento de Talento Humano, que diga que un analista distrital realiza otras funciones, lo cual es un problema de la administración pública que no lo iban hacer, primero sus compañeros de trabajo y segundo, hubiese sido un problema, menos bien para ustedes, porque eso hubiese demostrado que le están pagando más a otras personas, y eso no lo iban hacer, en ese sentido, nuestras pruebas han sido concluyentes y el Estado no ha podido demostrar el por qué una situación de discriminación de trato desigual a la hoy compareciente, no ha podido decir nada de los pares de igualdad, que son funcionarios que tienen el mismo cargo y si ganan los 986 dólares que garantizan una dignidad. La hoy compareciente, que trabaja desde 1995, tiene también intenciones de algún momento jubilarse y de terminar sus labores, y estos años justamente ayudan a que tenga una jubilación digna en relación a su cargo, los funcionarios públicos de turno que responden a fines políticos y que dan nombramientos provisionales, lo que llaman y dan contratos ocasionales a cualquier persona sin un análisis técnico, no se van a preocupar y es por eso que cuando existe una relación de poder entre la autoridad pública y los ciudadanos, como la hoy compareciente Margoth Soto de total diferencia, si el poder y la situación de los funcionarios y ciudadanos, especialmente quienes vivimos alejados de la centralidad, es cuando estas acciones constitucionales tienen justamente la mayor relevancia y la razón de ser estar plenamente justificada en nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra Constitución, es por eso que el constituyente vio la necesidad de incluir estas garantías justamente para revertir esa situación de poder que de otra manera sería insoportable para los ciudadanos en ese sentido ratificamos nuestra pretensión.

## **QUINTO**

### **CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS**

La acción planteada, pretende la protección contemplada en la Constitución, referente al derecho a la igualdad formal y material y no discriminación, derecho de igual trabajo igual remuneración, vulneración del principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales, constantes en el artículo, 11, numeral 2, artículo 66, numeral 4, artículo 326, numeral 4, artículo 11, numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, en tal virtud, corresponde a este juez, analizar el caso concreto, con el fin de determinar si

efectivamente existió o no vulneración de los derechos constitucionales mencionados.

Para tal fin es necesario dilucidar los siguientes problemas jurídicos: **a. ¿Cuál es la finalidad de la acción de protección?**; **b. *¿La inacción de las máximas autoridades del Ministerio de Educación, en el trato no igualitario en relación a la señora MARIA MARGOTH SOTO BEJARANO, con otros funcionarios que tiene el mismo cargo afectan a sus derechos a la igualdad formal y material y no discriminación, derecho de igual trabajo igual remuneración, vulneración del principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales?***

**a. ¿Cuál es la finalidad de la acción de protección?**

El título III de la Constitución ecuatoriana, se refiere a las Garantías Constitucionales y en su Capítulo Tercero, las Garantías Jurisdiccionales.

**Blacio Aguirre Galo**, en su obra la “Protección Jurisdiccional de los Derechos Constitucionales”, 1ª Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2016, págs. 19 y 20, dice:

“[...]

El término garantía significa obligación o responsabilidad, así, las garantías jurisdiccionales se constituyen en una obligación o responsabilidad del Estado para con las personas, para asegurar la vigencia de los derechos que consagra en su texto.

Al hablar del término garantía, desde el punto de vista jurídico, se tiene una idea de protección.

Las garantías son los medios o instrumentos jurídicos, establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos, es decir estas garantías están previstas para proteger a los derechos cuando estos son vulnerados, por lo tanto sirven de freno contra la arbitrariedad y la ilegalidad. [...]”<sup>[4]</sup>

La Corte Constitucional del Ecuador en período de Transición, en la sentencia No. 049-10-SEP. Caso No. 0050-10-EP, de fecha 21.10.2010, manifestó:

“[...]

Las garantías jurisdiccionales se definen como declarativas, de conocimiento y reparatorias". A través de la interposición de la acción extraordinaria de protección, el juez constitucional debe realizar un análisis sustancial de la cuestión controvertida, luego de lo cual, tiene la obligación, si el caso, amerita, de declarar la violación de uno o varios derechos constitucionales e inmediatamente ordenar su reparación integral, conforme lo prescribe el artículo 86, numeral 3 de la Constitución de la República. En este escenario, las garantías jurisdiccionales determinan la obligación que tiene el juez constitucional en el control de los actos públicos, a efectos de que no se vulneren los derechos constitucionales; de este modo, las garantías constitucionales se orientan a dar sustento al Estado constitucional de derechos y justicia. [...]”<sup>[5]</sup>

La garantía brindada por la Constitución, mediante la acción de protección debe cumplir además con el requisito específico establecido en el artículo 88 ya que esta tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, no se trata, por lo tanto, de cualquier garantía sino de una garantía eficaz.

“[...] No obstante, esto no implica por otro lado que la acción de protección haya sido concebida por el constituyente para reemplazar los mecanismos judiciales ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico para resolver cuestiones que versan sobre aspectos de estricta legalidad, pues es claro que no todos los conflictos jurídicos conllevan un contenido constitucional. Sobre esta línea de ideas se ha pronunciado esta magistratura en varios de sus fallos, determinando que:

(...) la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de esos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria. **El juez constitucional cuando de la sustanciación de una garantía jurisdiccional establezca que no existe vulneración de derechos constitucionales, sino únicamente posibles controversias de índole infraconstitucional puede señalar la existencia de otras vías.**<sup>[6]</sup>

El art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece:

“[...]

**PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS.-** La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigida. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. [...]”

La protección de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado, según estas normas, no es cualquier protección. Se trata de una tutela efectiva, esto es una protección que garantice que en la práctica los derechos sean respetados por todos. Ante ello puede afirmarse que la Constitución prevé un principio de efectividad, por medio del cual podrán ser evaluados los actos de protección de los derechos y en su caso, juzgados no tanto desde la óptica de la validez procedimental o sustancial, sino desde la perspectiva de su capacidad de asegurar o no en la realidad la garantía integral de los derechos.

La acción de protección protege los derechos en forma directa y eficaz. De forma directa, porque él que debe protegerlos actúa en forma vertical hacia el objetivo final, sin pretenderse detener o detenerse en algún punto, “[...] tal como el derecho es directo y recto, en la misma forma el juez debe garantizar y proteger los derechos a todo sujeto que recurra a él. [...]”<sup>[7]</sup>, lo eficaz, equivale a la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

En definitiva, la acción de protección protege los derechos constitucionales a excepción de los derechos que están amparados por las otras garantías jurisdiccionales como son el habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.

Por lo tanto:

“[...]

Las garantías jurisdiccionales deben activarse cuando las garantías normativas y cuando las garantías de políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana no funcionan. Por ello, las garantías jurisdiccionales son garantías secundarias, en tanto que las garantías dependientes de los órganos representativos y de la ciudadanía, operan como garantías primarias. [...]”[8]

La acción de protección Constitucional puede ser propuesta por cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidades conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador.

La acción de protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la Constitución y artículo 39 de la Ley de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y puede interponerse cuando exista una vulneración de los derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular; si la violación del derecho provoca daño grave, si presenta servicios públicos improprios, si actúa por delegación o concesión, o si las personas afectadas se encuentran en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

En consecuencia se evidencia que la acción de protección, tiene un propósito tutelar, destinados a cesar, evitar la comisión, remediar las consecuencias de un acto u omisión ilegítimas que vulneren derechos fundamentales protegidos por lo que es condición de la autoridad y como consecuencia establecer las medidas conducentes a la protección de los derechos constitucionales vulnerados cuyo daño grave o eminencia de daño imponga la tutela constitucional efectiva que la acción de protección garantiza.

En este sentido es de valor sustantivo y condición de procedencia de la acción de protección la verificación de la ilegitimidad en la que haya incurrido la autoridad pública o de particulares y la posibilidad efectiva de la tutela que el actor la promueve para garantizar los derechos constitucionales vulnerados.

Conforme lo prescrito en el art. 75 ibídem, señala:

“[...]

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial, expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la Ley [...]”.

La presente acción de protección ordinaria constitucional, es presentada directamente por la presunta persona agraviada de derechos constitucionales señora Mercedes Genoveva Coello Santillán, en consecuencia, es legítima su intervención.

La justicia o jurisdicción constitucional es el conjunto de mecanismos de control constitucional, comprende las normas que establecen las acciones de que pueden valerse las personas, sean naturales o jurídicas, para hacer que las autoridades y los particulares respeten sus derechos, los órganos jurisdiccionales competentes, los legitimados o sea las personas facultadas para deducir las acciones y el proceso.

La acción en cambio es la facultad para recurrir a los órganos del Estado para obtener que ellas, primero acojan ciertas pretensiones o sea los derechos que les corresponde y que un tercero no los reconoce o los niega y luego hacer ejecutar sus decisiones, particularmente lo determinado por el artículo 88 de la Constitución.

Entre otras de las características del Estado Constitucional de Derechos es el reconocimiento y garantía de los derechos inherentes a la libertad, igualdad, no discriminación, exclusión y dignidad de las personas. Estos derechos la Constitución prevé como los medios con los cuales pueden ser protegidos sus derechos constitucionales, así como de la acción u omisión de las autoridades y de los particulares que pudieren desconocerlos o atropellarlos, estas acciones con el nombre de garantías jurisdiccionales en nuestra legislación constitucional son entre otras la acción de protección constitucional y que mediante la presente acción formula el accionante.

Pero que, para proponerla, tiene que observarse si el juez es el competente, sino se encuentra pendiente recurso o acción administrativa alguna, y si se cuenta con los sujetos procesales de

la acción, cuales son: La autoridad de la administración pública responsable, el acto reclamado, el ofendido con legitimidad e interés jurídico, la garantía violada y cuando “exista una vulneración de los derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales”, y si “la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

Recordemos que, en nuestro país, se ha construido otro marco jurídico-político, denominado **neoconstitucionalismo**, en donde la constitución, es un instrumento que no solo organiza el poder, sino que además es fundamentalmente normativa y sus normas deben aplicarse en forma inmediata y directa, su interpretación difiere de la tradicional, es sistemática, se utiliza el método de ponderación de derechos, que se auxilia del test de proporcionalidad, el método de unidad de la Constitución y el de la armonización; todo el sistema constitucional debe funcionar y ser interpretado desde una nueva perspectiva, la de los derechos fundamentales, porque se fundamenta en ellos, son su eje central y, para su efectiva vigencia se han reforzado con acciones constitucionales, para el neoconstitucionalismo no existen derechos absolutos, todos tiene igual valor y jerarquía.

EL Dr. Rafael Oyarte dice que la constitución, como categoría normativa nace a través de la teoría del poder constituyente, más su consagración como norma se debe a la aplicación de los sistemas de justicia constitucional que le otorgan eficacia.

La acción de protección procede en los siguientes casos: 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular; 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Sin embargo, a pesar de señalar que el trámite es sencillo y rápido, es deber de los jueces constitucionales respetar las garantías básicas del debido proceso, es decir, garantizar a las partes el derecho de defensa, entre otros, con la finalidad de que su actuación no se torne en arbitraria y por ende vulnere los derechos a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica de las partes. En este sentido, es tan importante la labor del Juez constitucional que debe cuidar el cumplimiento de los derechos constitucionales de las partes.

**b.- *¿La inacción de las máximas autoridades del Ministerio de Educación, en elación al trato no igualitario en relación a la señora MARIA MARGOTH SOTO BEJARANO, con otros funcionarios que tiene el mismo cargo, afectan a sus derechos a la igualdad formal y material y no discriminación, derecho de igual trabajo igual remuneración, vulneración del***

***principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales?***

***Derecho a la igualdad Formal y Material y no discriminación.***

El derecho a la no discriminación constante en el artículo 11 numeral 2, en concordancia con el artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la República garantiza que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y reconoce el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

En cuanto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 122-16-SEP-CC Caso N. 0858-10-EP, y Sentencia No. 7-1 1-IA/19 Caso No. No. 7-11-IA identifica:

“La dimensión formal está establecida en el artículo 11 numeral 2, de la CRE cuando establece que: "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades"; es decir la igualdad formal implica un trato idéntico a sujetos individuales o colectivos que se hallen en la misma situación.

Por otro lado, la dimensión material establecida en el artículo 11 numeral 2, inciso 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad". Esta dimensión del derecho supone, que los sujetos que se encuentren en condiciones diferentes, requieren un trato distinto que permita equiparar el goce y ejercicio de sus derechos a personas que se encuentran en situaciones distintas.

En función de lo señalado, se puede colegir que la igualdad en sentido formal se refiere a la igualdad ante la ley stricto sensu, por medio de la cual se proclama que las normas jurídicas deben ser aplicadas a todas las personas, sin distinción de ninguna clase. Esta categoría se refiere a la igualdad en la aplicación del derecho, lo que según el jurista Robert Alexi implica que toda norma jurídica debe ser aplicada a todo caso que cae bajo el supuesto de hecho previsto por la norma y a ningún caso que no caiga bajo dicho supuesto. Es decir, se refiere al derecho de toda persona a ser tratada de manera igualitaria en cuanto a la aplicación de determinadas disposiciones legales, siempre que se enmarque en lo previsto por dicha norma jurídica.

La dimensión material de este derecho, parte del reconocimiento de las diferencias existentes respecto a las condiciones materiales para el desarrollo de las personas en cuyo caso, corresponde al Estado, desarrollar y adoptar las acciones positivas necesarias que promuevan la equiparación de las situaciones materiales de los individuos o grupos sociales que se encuentren en desventaja frente a quienes tengan mejores condiciones.

Por tanto, el concepto de igualdad, visto como un derecho constitucional, implica un trato igual a situaciones análogas, pero diferente entre otras situaciones; es por ello que el propio ordenamiento jurídico contiene disposiciones legales que serán aplicables a situaciones

concretas presentadas en un hecho fáctico y/o por actores sociales determinados y a su vez, prevé circunstancias en las que es necesario configurar un trato diferente a determinados agentes en virtud de ciertos presupuestos, circunstancias y hechos, existiendo un margen dentro de la configuración legislativa que permite realizar esta diferenciación...”

En lo que se refiere al carácter material de la igualdad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado: “...la materialización del derecho a la igualdad supone, necesariamente, una comparación entre dos o más hechos o situaciones que son objeto de regulación legal, a fin de establecer si estas son realmente iguales, y por consiguiente deben ser reguladas igualmente, pues (...) es un principio derecho que instala a las personas situadas en idéntica condición en un plano de equivalencia (...) de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se concedan a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones (...)”

La Corte Constitucional de Colombia, en sentencia C-250-12 prevé:

“...la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en precisar el alcance general del principio de igualdad al menos en su acepción de igualdad de trato del cual se desprenden dos normas que vinculan los poderes públicos: por una parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos de hechos equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente, del mismo modo el principio de igualdad también comprende un mandato de tratamiento desigual que obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes. Sin embargo, este segundo contenido no tiene un sentido tan estricto como el primero, sobre todo cuando va dirigido al Legislador, pues en virtud de su reconocida libertad de configuración normativa, este no se encuentra obligado a la creación de una multiplicidad de regímenes jurídicos atendiendo todas las diferencias, por el contrario se admite que con el objeto de simplificar las relaciones sociales, ordene de manera similar situaciones de hecho diferentes siempre que no exista una razón suficiente que imponga la diferenciación (...)”

La accionante refiere un trato discriminatorio formal y material, por cuanto el Ministerio de Educación, mantiene un trato diferenciado en relación a los otros servidores que ostentan el mismo cargo, ella percibe una remuneración de \$675, mientras que sus compañeros reciben la remuneración de \$986; y que su cargo conforme consta en la acción de personal Nro. 074-UATH-2019, de fecha 21/11/2019, es de ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIÓN CIUDADANA.

La parte accionante presenta información de la LOTAID, cargada en la página del Ministerio de Educación en donde consta nombres de servidores públicos y con el mismo cargo de Analista Distrital de Atención Ciudadana, reciben la R.M.U. de \$ 986, mientras que la accionante recibe \$ 675.00, la institución accionada, no se ha opuesto a lo manifestado por la accionante. Por lo anotado, queda demostrado que, la entidad, ha vulnerado el derecho de la accionante a no ser discriminada y a la igualdad material.

Para determinar si ha existido en un caso concreto afectación a la igualdad y no discriminación; ello, en su esfera constitucional, se debe realizar un análisis en base a los tres requisitos, que señala la Corte Constitucional, que para configurar un trato discriminatorio debe existir, COMPARABILIDAD; sujetos que estén en iguales o similares condiciones; luego se debe aplicar UNA DE LAS CATEGORÍAS que esta en la Constitución de la República del Ecuador; y, VERIFICACIÓN DEL RESULTADO, en donde se evidencie discriminación si la diferencia tiene como objeto el menoscabo, o la anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

En el presente caso, y de la prueba practicada, se verifica el trato desigual a la accionante María Soto Bejarano, en relación a Tania Buenaño, Ángel Buñay, Rosana Cabrera, Rosa Casa Tipan, Luis Enrique Castro.

La Corte Constitucional, en sentencia Nro. Sentencia N.º 603-12-JP/19 (acumulados), en el párrafo 17 señala:

17. La definición anterior tiene tres elementos para configurar el trato discriminatorio: (1) La comparabilidad: tiene que existir dos sujetos de derechos que están en igual o semejantes condiciones; (2) la constatación de un trato diferenciado por una de las categorías enunciadas ejemplificativamente en el artículo 11.2, que son categorías protegidas y que, cuando se utilizan para diferenciar, se denominan categorías sospechosas; (3) la verificación del resultado, por el trato diferenciado, y que puede ser una diferencia justificada o una diferencia que discrimina. La diferencia justificada se presenta cuando se promueve derechos, y la diferencia discriminatoria cuando tiene como resultado el menoscabo o la anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

La Comparabilidad.- señala que los involucrados deben estar en la misma y similares condiciones; en el presente caso, se observa que la accionante María Margoth Soto Bejarano y Buenaño Silva Tania Elizabeth, de quien se tiene en el proceso la acción de personal, están en las mismas condiciones y funciones, sin embargo recibe una remuneración diferente.

El Trato diferente.- La defensa del Ministerio de Educación señala que la accionante, firmo un documento aceptando el cambio pero que iba a reclamar por su remuneración, esto es contra norma legal y constitucional, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, por lo que sin sustento legal, la señora María Margoth Soto Bejarano, tiene un trato diferenciado sin justificación alguna.

La Verificación del Resultado.- En el presente caso, existe una discriminación positiva, perjudica, el derecho a percibir por su trabajo igual remuneración que sus otros compañeros; por lo tanto existe un trato diferenciado que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación.

Es decir, que cuando una persona particular o un órgano público realiza cualquier trato

diferenciado, no solo que actúa en contra de normas previas, públicas y claras, conculca el derecho a ser tratada igualitariamente frente a otras personas, el Ministerio de Educación, evidentemente vulnera el derecho de igualdad, por cuanto la señora **Soto Bejarano María Margoth**, tiene el cargo de **ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIÓN CIUDADANA**, con un sueldo de \$ **675,00**, mientras que la señora **TANIA ELIZABETH BUENAÑO SILVA**, con acción de personal Nro. 69-UDTH-06D01-2022, de fecha 18/7/2022, tiene el cargo de **ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIÓN CIUDADANA**, con una remuneración mensual de \$**986,00**, no puede un servidor público recibir remuneración menor a servidores que se encuentran en la misma situación ocupacional, esta es una violación al derecho de igualdad.

El abogado del Ministerio de Educación ha indicado que, toda persona tiene derecho a igual trabajo, igual remuneración siempre y cuando se justifique sus actividades que realiza dentro de una institución pública, por lo cual se tiene que justificar qué actividades realiza la legitimada activa, si lo realiza como analista de atención ciudadana o lo realiza como técnica de atención ciudadana, al respecto se debe tomar en cuenta que, según se desprende de la acción de personal Nro. 074-UATH-2019, de fecha 21/11/2019, es de ANALISTA DISTRITAL DE ATENCIÓN CIUDADANA, lo que justifica de manera formal, si el Ministerio de Educación quería demostrar lo contrario, la carga de prueba se invierte, por mandato legal, la prueba únicamente se recepta en audiencia, lo que en el presente caso no presento prueba alguna, por lo que no se puede realizar un análisis, de que exista un oficio en el que la señora María Margoth Soto Bejarano, haya aceptado que el cambio no llevaría a un aumento de su remuneración unificada, hecho que no ha sido justificado, y que en lo principal fue su argumento de defensa.

Por lo anotado, se establece que la señora María Margoth Soto Bejarano, tiene el cargo de Analista Distrital de Atención Ciudadana, como SP3, grado 9, y que percibe una remuneración mensual de \$675,00, en relación a la señora BUENAÑO SILVA TANIA ELIZABETH, que tiene el cargo de Analista Distrital de Atención Ciudadana, y tiene una remuneración mensual de \$986,00, se le ha tratado de manera diferente al resto de trabajadores pese a tener el mismo cargo.

### ***Derecho de igual trabajo igual remuneración.***

En relación al derecho a igual trabajo igual remuneración, la Corte Constitucional en la sentencia N.º 214-14-SEP-CC, CASON.º1049-10-EP, determinó:

Dentro de los principios que sustentan al derecho al trabajo, la Constitución de la República en su artículo 326 numeral 4, ha previsto que "(•••) a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración", principio que permite vincular y aplicar el principio jurídico de la igualdad a los derechos laborales, evidenciándose de esa forma la interdependencia y complementariedad que existe entre los derechos. Esta complementariedad fue reconocida por la Corte Constitucional que, ha referido lo siguiente:

Es importante destacar que el antedicho principio, guarda estrecha relación con el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación de las personas, que contempla el artículo 66 numeral 4 del texto constitucional. De esta manera, el principio que nos ocupa plantea una igualdad material, cuyo objeto consiste en un mismo trato para las personas que se encuentran bajo iguales condiciones (...). Consecuentemente, esta Corte considera que en función al derecho a la igualdad, así como por la protección laboral que se establece para los trabajadores, estos deberán gozar de igual remuneración cuando no haya fundamentos para justificar lo contrario.

“Estos criterios, permiten a la Corte Constitucional, a través de una interpretación sistemática, referirse al artículo 33 de la Constitución, el cual contiene un mandato hacia el Estado para garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto de su dignidad...

Así, pretendemos establecer en primer lugar que el concepto de la dignidad humana podría ser entendido como aquella condición inherente a la esencia misma de las personas, que, en una íntima relación con el libre desarrollo de su personalidad, a su integridad y a su libertad, le dotan de características especiales que trascienden lo material y que tienden a una profunda consolidación en el más alto nivel de la tutela, protección y ejercicio de los derechos humanos...”

La Constitución de la República del Ecuador, en relación al derecho al trabajo, señala lo siguiente:

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.”

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.
3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.
7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.
8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección.
9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.
10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.
11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.
12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.
13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.
14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.
15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.
16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan

la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.”

“Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.”

Como queda señalado, la señora María Margoth Soto Bejarano, tiene el cargo de Analista Distrital de Atención Ciudadana, percibe un sueldo de 675 dólares, mientras que la señora Tania Elizabeth Buenaño Silva, tiene el cargo de Analista Distrital de Atención Ciudadana, percibe una remuneración de 986 dólares, sin que se presente razones lógicas, para que se produzca esta diferencia.

El derecho constitucional a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración, se encuentra protegido por la Constitución de la República del Ecuador, artículo 326, numeral 4. Por lo que, en la presente acción de protección, existe vulneración a este derecho constitucional.

#### ***Principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales.***

En la Constitución se establece que el principio de aplicación inmediata y directa “self executin”, que no tiene otro significado que los derechos y garantías de las personas deben ser aplicadas sin necesidad de norma que las desarrolle, y en armonía con el principio de que las leyes no pueden restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, por ello que tanto los instrumentos internacionales de derechos humanos y la propia Constitución en el artículo 275 inciso tercero, le da al “BUEN VIVIR” categoría constitucional.

Principio conforme al cual los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. La Constitución de la República del Ecuador, señala en el artículo 11. “Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa ni para negar el reconocimiento de tales derechos.

En el caso en estudio, al no cancelarle a la señora Soto Bejarano María Margoth, los valores que le corresponde percibir desde el año 2019, esto de 986 dólares como Analista Distrital de Atención Ciudadana, vulnera el principio de aplicación inmediata de los derechos fundamentales.

De lo anotado se desprende que se ha vulnerado derechos constitucionales de la accionante, al tener un reconocimiento de parte del Estado, mediante la acción de personal Nro. 074-UATH-2019, no se le cancela la remuneración mensual que le corresponde.

### DECISIÓN

De lo anotado se desprende que los derechos constitucionales, de igualdad formal, material y no discriminación, derecho de igual trabajo igual remuneración de la actora MARÍA MARGOTH SOTO BEJARANO, y, la vulneración del principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales, han sido vulnerado.- Por consiguiente: “**ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**”, considerando que de los hechos se desprende que existe una violación de derechos constitucionales como son: de igualdad formal, material y no discriminación, derecho de igual trabajo igual remuneración y la vulneración del principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales, se declara procedente y se admite la acción de protección propuesta por **MARÍA MARGOTH SOTO BEJARANO**, en contra del Ministerio de Educación, del Distrito 06D05, en las personas del **Lic. Daniel Caicedo Zevallos** Ministro de Educación y **Lic. Lourdes Mancero Fray** Directora Distrital 06D05.

Conforme establece el artículo 18 de la de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como reparación integral se dispone:

a. El Ministerio de Educación, tutele de forma igualitaria la situación ocupacional de MARÍA MARGOTH SOTO BEJARANO, como Analista Distrital de Atención Ciudadana del grupo ocupacional de Servidor Público SP3, grado 9, con la remuneración que corresponde, a \$986,00 USD.

b. Se dispondrá el pago de la remuneración ajustada desde el 25 de noviembre del 2019, hasta la actualidad, para su consecuente reclamación de acuerdo al trámite pertinente establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y

conforme a la sentencia Nro. 8-22-IS/22 de la Corte Constitucional.

c. De la misma manera, se dispondrá que la autoridad accionada se abstenga de ejecutar acciones que afecten los derechos fundamentales de la accionante.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el señor secretario, remita copia de esta Resolución para ante la Corte Constitucional del Ecuador, de causar ejecutoría.

A la finalización de la audiencia y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Ab. Jaime Rigoberto Chicaiza, apela de la sentencia, se concede ante la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, el señor actuario del despacho, remita el proceso debidamente organizado a la sala de sorteos, para que se radique la competencia en una Sala.

Actúe en calidad de secretario del despacho el Ab. Julián Zapata Coello. - **CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.** -

- 
1. ^ Órgano Jurisdiccional representado por el Dr. Luis Nelson Rodríguez Vásquez.
  2. ^ Art. 14, inciso tercero, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
  3. ^ Demanda proceso Nro. 06282-2023-02157.
  4. ^ Blacio Aguirre Galo, *Protección Jurisdiccional de los Derechos Constitucionales*, 1ª Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2016, págs. 19, 20.
  5. ^ Corte Constitucional del Ecuador en período de Transición, Sentencia No. 049-10-SEP. Caso No. 0050-10-EP, de fecha 21.10.2010
  6. ^ Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 149-18-SEP-CC, Caso No. 0888-17-

*EP*

7. ^ CUEVA CARRIÓN, *Luis Acción Constitucional Ordinaria de Protección*, Ediciones Cueva Carrión, Primera Edición, Quito – Ecuador, año 2009, pág. 142.
8. ^ Blacio Aguirre Galo, *Protección Jurisdiccional de los Derechos Constitucionales*, 1ª Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2016, págs. 16.

**RODRIGUEZ VASCONEZ LUIS NELSON**

**JUEZ(PONENTE)**